

LUIS ALBERTO ROMERO

BREVE HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE LA ARGENTINA



FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

MÉXICO - ARGENTINA - BRASIL - COLOMBIA - CHILE
ESPAÑA - ESTADOS UNIDOS - PERÚ - VENEZUELA

VII. El Proceso, 1976-1983

El genocidio

El 24 de marzo de 1976 la Junta de Comandantes en Jefe, integrada por el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Ramón Agosti, se hizo cargo del poder, dictó los instrumentos legales del llamado Proceso de Reorganización Nacional y designó presidente de la Nación al general Videla, quien además continuó al frente del Ejército hasta 1978.

El caos económico de 1975, la crisis de autoridad, las luchas facciosas y la muerte presente cotidianamente, la acción espectacular de las organizaciones guerrilleras —que habían fracasado en dos grandes operativos contra unidades militares en el Gran Buenos Aires y Formosa—, el terror sembrado por la Triple A, todo ello creó las condiciones para la aceptación de un golpe de Estado que prometía restablecer el orden y asegurar el monopolio estatal de la fuerza. La propuesta de los militares —quienes poco habían hecho para impedir que el caos llegara a ese extremo— iba más allá: consistía en eliminar de raíz el problema, que en su diagnóstico se encontraba en la sociedad misma y en la naturaleza irresoluta de sus conflictos. El carácter de la solución proyectada podía adivinarse en las metáforas empleadas —enfermedad, tumor, extirpación, cirugía mayor—, resumidas en una más clara y contundente: cortar con la espada el nudo gordiano.

El tajo fue en realidad una operación integral de represión, cuidadosamente planeada por la conducción de las tres armas, ensayada primero en Tucumán —donde el Ejército intervino oficialmente desde 1975— y luego ejecutada de modo sistemático en todo el país. Así lo estableció la investigación realizada en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, que creó el presidente Raúl Alfonsín, y luego la Justicia, que juzgó a los militares implicados y condenó a muchos de ellos. Los mandos militares concentraron en sus manos toda la acción y los grupos parapoliciales de distinto tipo que habían operado en los años anteriores se disolvieron

pobres sin vivienda, como no sucedía desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial.

Simultáneamente, se produjo la transnacionalización de la economía que también socavó la permanencia del Estado benefactor al presionar a favor de mayor competitividad. De tal manera que los gobiernos socialdemócratas también se vieron forzados a ensayar políticas de austeridad recortando el gasto social.

Desde el punto de vista político, los partidos socialdemócratas que en los 80 habían ganado el electorado en varios países fueron perdiendo parte de su fuerza electoral en los 90 a favor de grupos menores con objetivos puntuales: xenófobos, secesionistas, partidos verdes de izquierda u otros movimientos sociales lograron cierta presencia electoral, aunque ninguno pudo reemplazar a los viejos partidos del *establishment*. En resumen, en este período las estructuras políticas estables de los países capitalistas democráticos comenzaron a desmoronarse.¹¹⁴

El mundo socialista no escapó a las generales de la ley. Se sintió el peso de las reprimidas demandas políticas y una profunda crisis en el sistema de planificación centralizada que no tuvo retorno y lo llevó a su desintegración a finales de los 80. La URSS no pudo sustraerse a los efectos de las crisis petroleras, la disminución de los precios de los cereales y la irrupción de la tecnología informática.

En muchos aspectos, las crisis en el este comunista y en el oeste capitalista recorrieron caminos paralelos y estuvieron vinculadas a una sola crisis global: sin embargo, divergieron en dos puntos fundamentales. Para el mundo soviético la rigidez de su sistema transformó el dilema de la crisis en cuestión de vida o muerte a la cual no sobrevivió. El sistema capitalista fue más flexible y la crisis nunca puso en juego la supervivencia de su sistema económico, ni siquiera de su sistema político a pesar de las transformaciones que éste soportó.¹¹⁵

La ineficiencia del Estado benefactor fue cuestionada no sólo por los neoliberales, la socialdemocracia y otros sectores propusieron reformas que en líneas generales se pusieron en práctica en la década del 80. Básicamente la crítica se centraba en que las enormes dimensiones que había adquirido el Estado le impedían atender eficientemente sus funciones básicas. Se recomendaba la

114. Cf. E. Hobsbawm, ob. cit.

115. Idem.

descentralización, la privatización, la focalización¹¹⁶ y el control de gestión en lugar de la intervención directa en los servicios públicos y sociales.

Hasta 1970, el único modelo de Estado era el Estado-nación. A partir de entonces este modelo comenzó a ser cuestionado y en el lapso de veinte años aproximadamente los Estados se debilitaron y perdieron parte de su soberanía. Desde mediados de los 60, una serie de movimientos de distinto orden produjo una revolución cultural que cuestionó y logró romper una serie de normas y valores sociales tradicionales. El tejido social que hacía que muchos habitantes se sintieran pertenecientes a una comunidad nacional comenzó a disolverse, mientras nacían comunidades sin fronteras: los hippies, las feministas, los gays, los jóvenes, las minorías étnicas, etc. Estos no se proponían una acción directa contra sus Estados, pero de hecho, rompían la solidaridad interna de su comunidad nacional al sentirse miembros de comunidades más amplias a escala mundial.

En la década de los 70 surgieron en varias regiones del mundo occidental movimientos separatistas que por distintas razones (económicas, étnicas o lingüísticas) buscaban algunos la autonomía, y otros la independencia de su región respecto del Estado al que pertenecían; éstos fueron particularmente violentos en Gran Bretaña, Canadá, España y Bélgica y, si bien la mayoría de ellos no logró su independencia, significaron fuertes golpes al modelo decimonónico.

También debilitó al Estado-nación la aparición de nuevas "autopistas" informáticas que lograron superar las limitaciones jurídicas de los ámbitos territoriales. Los parlamentos, los sindicatos, los sistemas nacionales de radiodifusión cuyo campo de acción se circunscribía al interior de las fronteras, perdieron terreno a medida que lo ganaban otras organizaciones que no tenían estas limitaciones, como las empresas transnacionales, el mercado financiero internacional y los medios de comunicación global de la era de los satélites.

La globalización económica significó también un retroceso de la autonomía del Estado con el surgimiento de problemas globales

116. El Estado de bienestar, fundado en la posguerra, se basaba en tres principios básicos generales: centralización, estatismo y universalismo de los servicios públicos y sociales. También abarcó actividades productivas en sectores de interés nacional, que permanecían rezagados. Apelo a la solidaridad social para construir una red que protegiera a los más débiles y reclamó el consenso entre empresarios y obreros con la mediación del Estado, para frenar la expansión del comunismo.

que afectaban a la humanidad —como las cuestiones ambientales y la supervivencia de las especies— pero que tenían resolución dentro de las fronteras nacionales a través de normas y acuerdos internacionales.¹¹⁷

La historia del Tercer Mundo, desde 1950 hasta fines de los 80, estuvo marcada por las vicisitudes de la Guerra Fría. Una parte no despreciable de países se descolonizó. Los países del Tercer Mundo constituían una zona mundial en ebullición. En ellos la revolución, sea realizada, inminente o posible, era una realidad cotidiana y palpable.

En este contexto, América latina, independiente desde el siglo pasado, se hallaba en una posición intermedia: esto no evitó golpes de Estado, la inestabilidad política ni la guerra de guerrillas.¹¹⁸

En la década del 70 se produjeron simultáneamente dos fenómenos económicos que se retroalimentaron entre sí, generando una situación explosiva a largo plazo. Por un lado, un importante endeudamiento externo y, por otro, altísimas tasas de inflación. Esta situación se exacerbó a mediados de la década, cuando la enorme liquidez del sistema financiero internacional presionó a las débiles economías latinoamericanas hacia la toma de préstamos baratos. Tanto los Estados como el sector privado se endeudaron "irresponsablemente" y una importante porción de los recursos se desvió desde el sector productivo hacia la especulación financiera. En los años 80, la brusca suba de las tasas de interés produjo en los gigantes¹¹⁹ la cesación de pagos y una moratoria de hecho en el pago de los intereses.

El cóctel explosivo de guerrilla y golpes militares autoritarios desde mediados de los 60, y especialmente represivos sobre todo en el cono sur a partir de los 70, produjo violentos enfrentamientos entre ambas partes. Esta violencia dejó varios miles de desaparecidos, emigración de perseguidos políticos, fuga de capitales, desinversión, cierre de industrias y una deuda externa monstruo-

117. Marcela Díaz, Ruth García y Alejandra González. *¿Orden o desorden? Una mirada sobre el proceso contemporáneo*.

118. Ejemplo de esto son la revolución cubana en 1959, y la situación de América Central y Colombia en la década de los 60, o los golpes militares en la década del 50, contra Perón en Argentina o en el resto de América en los 60 y los 70.

119. Brasil, México y Argentina debían entre sesenta mil dólares y ciento diez mil dólares en 1990.

sa. La llamada "década perdida" de los 80 dejó a América latina descolgada del resto del mundo.

LUIS ALBERTO ROMERO

BREVE HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE LA ARGENTINA



FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

MÉXICO - ARGENTINA - BRASIL - COLOMBIA - CHILE
ESPAÑA - ESTADOS UNIDOS - PERÚ - VENEZUELA

VII. El Proceso, 1976-1983

El genocidio

El 24 de marzo de 1976 la Junta de Comandantes en Jefe, integrada por el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Ramón Agosti, se hizo cargo del poder, dictó los instrumentos legales del llamado Proceso de Reorganización Nacional y designó presidente de la Nación al general Videla, quien además continuó al frente del Ejército hasta 1978.

El caos económico de 1975, la crisis de autoridad, las luchas facciosas y la muerte presente coridianamente, la acción espectacular de las organizaciones guerrilleras —que habían fracasado en dos grandes operativos contra unidades militares en el Gran Buenos Aires y Formosa—, el terror sembrado por la Triple A, todo ello creó las condiciones para la aceptación de un golpe de Estado que prometía restablecer el orden y asegurar el monopolio estatal de la fuerza. La propuesta de los militares —quienes poco habían hecho para impedir que el caos llegara a ese extremo— iba más allá: consistía en eliminar de raíz el problema, que en su diagnóstico se encontraba en la sociedad misma y en la naturaleza irresoluble de sus conflictos. El carácter de la solución proyectada podía adivinarse en las metáforas empleadas —enfermedad, tumor, extirpación, cirugía mayor—, resumidas en una más clara y contundente: cortar con la espada el nudo gordiano.

El tajo fue en realidad una operación integral de represión, cuidadosamente planeada por la conducción de las tres armas, ensayada primero en Tucumán —donde el Ejército intervino oficialmente desde 1975— y luego ejecutada de modo sistemático en todo el país. Así lo estableció la investigación realizada en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, que creó el presidente Raúl Alfonsín, y luego la Justicia, que juzgó a los militares implicados y condenó a muchos de ellos. Los mandos militares concentraron en sus manos toda la acción y los grupos parapoliciales de distinto tipo que habían operado en los años anteriores se disolvieron

o se subordinaron a ellos. Las tres armas se asignaron diferentes zonas de responsabilidad y hasta mantuvieron una cierta competencia para demostrar mayor eficacia, lo que dio a la operación una fisonomía anárquica y factional que, sin embargo, no implicó acciones casuales, descontroladas o irresponsables, y lo que pudo haber de ello formó parte de la concepción general de la horrenda operación.

La planificación general y la supervisión táctica estuvo en manos de los más altos niveles de conducción castrense, y los oficiales superiores no desearon participar personalmente en tareas de ejecución, poniendo de relieve el carácter institucional de la acción y el compromiso colectivo. Las órdenes bajaban, por la cadena de mandos, hasta los encargados de la ejecución, los Grupos de Tareas —integrados principalmente por oficiales jóvenes, con algunos suboficiales, policías y civiles—, que también tenían una organización específica. La ejecución requirió también un complejo aparato administrativo, pues debía darse cuenta del movimiento —entradas, traslados y salidas— de un conjunto muy numeroso de personas. Cada detenido, desde el momento en que era considerado sospechoso, era consignado en una ficha y un expediente, se hacía un seguimiento, una evaluación de su situación y se tomaba una decisión final que correspondía siempre al más alto nivel militar. La represión fue, en suma, una acción sistemática realizada desde el Estado.

Se trató de una acción terrorista, dividida en cuatro momentos principales: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. Para los secuestrados, cada grupo de operaciones —conocido como "la patota"— operaba preferentemente de noche, en los domicilios de las víctimas, a la vista de su familia, que en muchos casos era incluida en la operación. Pero también muchas detenciones fueron realizadas en fábricas o lugares de trabajo, en la calle, y algunas en países vecinos, con la colaboración de las autoridades locales. La operación se realizaba con autos sin patente pero bien conocidos —los famosos "Falcon verdes"—, mucho despliegue de hombres y armamento pesado, combinando el anonimato con la ostentación, todo lo cual aumentaba el buscado efecto aterrador. Al secuestro seguía el saqueo de la vivienda, perfeccionado posteriormente cuando se obligó a las víctimas a ceder la propiedad de sus inmuebles, con todo lo cual se conformó el botín de la horrenda operación.

El destino primero del secuestrado era la tortura, sistemática y prolongada. La "picana", el "submarino"—mantener sumergida la cabeza en un recipiente con agua— y las violaciones sexuales eran las formas más comunes; se sumaban otras que combinaban la tecnología con el refinado sadismo del personal especializado, puesto al servicio de una operación institucional de

la que no era raro que participaran jefes de alta responsabilidad. La tortura física, de duración indefinida, se prolongaba en la psicológica: sufrir simulacros de fusilamiento, asistir al suplicio de amigos, hijos o esposos, comprobar que todos los vínculos con el exterior estaban cortados, que no había nadie que se interpusiera entre la víctima y el victimario. En principio la tortura servía para arrancar información y lograr la denuncia de compañeros, lugares, operaciones, pero más en general tenía el propósito de quebrar la resistencia del detenido; anular sus defensas, destruir su dignidad y su personalidad. Muchos morían en la tortura, se "quedaban"; los sobrevivientes iniciaban una detención más o menos prolongada en alguno de los trescientos cuarenta centros clandestinos de detención —los "chupaderos"— que funcionaron en esos años y cuya existencia fue reiteradamente negada por las autoridades. Se encontraban en unidades militares —la Escuela de Mecánica de la Armada, Campo de Mayo, los Comandos de Cuerpo— pero generalmente en dependencias policiales, y eran conocidos con nombres de macabra fantasía: el Olimpo, el Vesubio, la Cacha, la Perla, la Escolita, el Reformatorio, Puerto Vasco, Pozo de Banfield... La administración y control del movimiento de este enorme número de centros da idea de la complejidad de la operación y de la cantidad de personas involucradas, así como de la determinación requerida para mantener su clandestinidad. En esta etapa final de su calvario, de duración imprecisa, se completaba la degradación de las víctimas, a menudo mal heridas y sin atención médica, permanentemente encapuchadas o "tabicadas", mal alimentadas, sin servicios sanitarios. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones, para ser luego despojadas de sus hijos, de los cuales en muchos casos se apropiaban sus secuestradores. No es extraño que, en esa situación verdaderamente límite, algunos secuestrados hayan aceptado colaborar con sus victimarios, realizando tareas de servicio o acompañándolos para individualizar en la calle a antiguos compañeros, todavía libres. Pero para la mayoría el destino final era el "traslado", es decir, su ejecución.

Esta era la decisión más importante y se tomaba en el más alto nivel operacional, como la jefatura de cada uno de los cuerpos de Ejército, después de un análisis cuidadoso de los antecedentes, potencial utilidad o "recuperabilidad" de los detenidos. Pese a que la Junta Militar estableció la pena de muerte, nunca la aplicó, y todas las ejecuciones fueron clandestinas. A veces los cadáveres aparecían en la calle, como muertos en enfrentamientos o intentos de fuga. En algunas ocasiones se dinamitaron pilas enteras de cuerpos, como espectacular represalia a alguna acción guerrillera. Pero en la mayoría de los casos los cadáveres se ocultaban, enterrados en cementerios como per-

sonas desconocidas, quemados en fosas colectivas que eran cavadas por las propias víctimas antes de ser fusiladas, o arrojados al mar con bloques de cemento, luego de ser adormecidos con una inyección. De ese modo, no hubo muertos sino "desaparecidos".

Las desapariciones se produjeron masivamente entre 1976 y 1978, el trienio sombrío, y luego se redujeron a una expresión mínima. Fue un verdadero genocidio. La comisión que las investigó documentó nueve mil casos, pero indicó que podía haber muchos otros no denunciados, mientras que las organizaciones defensoras de los derechos humanos reclamaron por 30 mil desaparecidos. Se trató en su mayoría de jóvenes, entre 15 y 35 años. Algunos pertenecían a las organizaciones armadas: el ERP fue diezmado entre 1975 y 1976, y a la muerte de Roberto Santucho, en julio de ese año, poco quedó de la organización. La organización Montoneros, que también experimentó fuertes bajas en sus cuadros, siguió operando, aunque tuvo que limitarse a acciones terroristas—hubo algunos asesinatos de gran resonancia, como el del jefe de la Policía Federal—desvinculadas de la práctica política, mientras su conducción y cuadros principales emigraron a México. Lo cierto es que cuando la amenaza real de las organizaciones cesó, la represión continuó su marcha. Cayeron militantes de organizaciones políticas y sociales, dirigentes gremiales de base, con actuación en las comisiones internas de fábricas—algunos empresarios solían requerir al efecto la colaboración de los responsables militares—, y junto con ellos militantes políticos varios, sacerdotes, intelectuales, abogados relacionados con la defensa de presos políticos, activistas de organizaciones de derechos humanos, y muchos otros, por la sola razón de ser parientes de alguien, figurar en una agenda o haber sido mencionados en una sesión de tortura. Pero más allá de los accidentes y errores, las víctimas fueron las queridas: con el argumento de enfrentar y destruir en su propio terreno a las organizaciones armadas, la operación procuraba eliminar todo activismo, toda protesta social—hasta un modesto reclamo por el boleto escolar—, toda expresión de pensamiento crítico, toda posible dirección política del movimiento popular que se había desarrollado desde mediados de la década anterior y que entonces era aniquilado. En ese sentido los resultados fueron exactamente los buscados.

Las víctimas fueron muchas, pero el verdadero objetivo eran los vivos, el conjunto de la sociedad que, antes de emprender su transformación profunda, debía ser controlada y dominada por el terror y la palabra. El Estado se desdobló: una parte, clandestina y terrorista, practicó una represión sin responsables, eximida de responder a los reclamos. La otra, pública, apoyada en un orden jurídico que ella misma estableció, silenciaba cualquier otra voz.

No sólo desaparecieron las instituciones de la República, sino que fueron clausuradas autoritariamente la confrontación pública de opiniones y su misma expresión. Los partidos y la actividad política toda quedaron prohibidos, así como los sindicatos y la actividad gremial; se sometió a los medios de prensa a una explícita censura, que impedía cualquier mención al terrorismo estatal y sus víctimas, y artistas e intelectuales fueron vigilados. Sólo quedó la voz del Estado, dirigiéndose a un conjunto atomizado de habitantes.

Su discurso, masivo y abrumador, retomó dos motivos tradicionales de la cultura política argentina y los desarrolló hasta sus últimas y horribles consecuencias. El adversario—de límites borrosos, que podía incluir a cualquier posible disidente—era el no ser, la "subversión apátrida" sin derecho a voz o a existencia, que podía y merecía ser exterminada. Contra la violencia no se argumentó en favor de una alternativa jurídica y consensual, propia de un Estado republicano y de una sociedad democrática, sino de un orden que era, en realidad, otra versión de la misma ecuación violenta y autoritaria.

El terror cubrió la sociedad toda. Clausurados los espacios donde los individuos podían identificarse en colectivos más amplios, cada uno quedó solo e indefenso ante el Estado aterrizador, y en una sociedad inmovilizada y sin reacción se impuso—como ha señalado Juan Corradi—la cultura del miedo. Algunos no aceptaron esto y emigraron al exterior—por una combinación variable de razones políticas y profesionales—o se refugiaron en un exilio interior, en ámbitos recoletos, casi domésticos, practicando el mimetismo a la espera de la brecha que permitiera volver a emerger. La mayoría aceptó el discurso estatal, justificó lo poco que no podía ignorar de la represión con el argumento del "por algo será", o se refugió en la deliberada ignorancia de lo que sucedía a la vista de todos. Lo más notable, sin embargo, fue una suerte de asunción e internalización de la acción estatal, traducida en el propio control, en la autocensura, en la vigilancia del vecino. La sociedad se patuló a sí misma, se llenó de *kapos*, ha escrito Guillermo O'Donnell, asombrado por un conjunto de prácticas que—desde la familia a la vestimenta o las creencias—revelaban lo profundamente arraigado que en ella estaba el autoritarismo que el discurso estatal potenciaba.

El gobierno militar nunca logró despertar ni entusiasmo ni adhesión explícita en el conjunto de la sociedad, pese a que lo intentó, a mediados de 1978, cuando se celebró el Campeonato Mundial de Fútbol y las máximas jerarquías asistieron a los estadios donde la Argentina obtuvo el título, y a fines de ese año cuando, agitando el más turbio sentimiento chauvinista, poco faltó para iniciar una guerra con Chile. Sólo obtuvo pasividad, pero le alcanzó para encajar las transformaciones profundas que—en su prospecto—habrían de eliminar

definitivamente los conflictos de la sociedad, y cuyas primeras consecuencias —la fiebre especulativa— contribuyeron por otra vía a la atomización de la sociedad y a la eliminación de cualquier posible respuesta.

La economía imaginaria: la gran transformación

Esa transformación fue conducida por José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía durante los cinco años de la presidencia de Videla. Cuando asumió, debía enfrentar una crisis cíclica aguda —inflación desatada, recesión, problemas en la balanza de pagos—, complicada por la crisis política y social y el fuerte desafío de las organizaciones armadas al poder del Estado. La represión inicial, que descabezó la movilización popular, sumada a una política anticrisis clásica —más o menos similar a todas las ejecutadas desde 1952— permitió superar la coyuntura. Pero esta vez las Fuerzas Armadas y los sectores del *establishment* que las acompañaban habían decidido ir más lejos. En su diagnóstico, la inestabilidad política y social crónica nacía de la impotencia del poder político ante los grandes grupos corporativos —los trabajadores organizados pero también los empresarios— que alternativamente se enfrentaban, generando desorden y caos, o se combinaban, unidos por una lógica peculiar, para utilizar en beneficio mutuo las herramientas poderosas del Estado intervencionista y benefactor. Una solución de largo plazo debía cambiar los datos básicos de la economía y así modificar esa configuración social y política crónicamente inestable. No se trataba de encontrar la fórmula del crecimiento —pues se juzgaba que a menudo allí anidaba el desorden— sino la del orden y de la seguridad. Invirtiendo lo que hasta entonces —de Perón a Perón— habían sido los objetivos de las distintas fórmulas políticas, se buscó solucionar los problemas que la economía ponía a la estabilidad política, si era necesario a costa del propio crecimiento económico.

Según un balance que progresivamente se imponía, cuyas implicaciones ha puesto en evidencia Adolfo Canitrot, el Estado intervencionista y benefactor, tal como se había constituido desde 1930, era el gran responsable del desorden social; en cambio, el mercado parecía el instrumento capaz de disciplinar por igual a todos los actores, premiando la eficiencia e impidiendo los malos comportamientos corporativos. Este argumento, que como se verá llegó a dominar en los discursos y en el imaginario, oscureció lo que fue, en definitiva, la solución de fondo: al final de la transformación que condujo a Martínez de Hoz, el poder económico se concentró de tal modo en un conjunto de grupos empresarios, transnacionales y nacionales, que la puja cor-

porativa y la negociación ya no fueron siquiera posibles. Esta transformación no fue el producto de fuerzas impersonales y automáticas: requirió de una fuerte intervención del Estado; para reprimir y desarmar a los actores del juego corporativo; para imponer las reglas que facilitarían el crecimiento de los vencedores y aun para trasladar hacia ellos, por la clásica vía del Estado, recursos del conjunto de la sociedad que posibilitaron su consolidación.

La ejecución de esa transformación planteaba un problema político, que ha expuesto Jorge Schvarzer: la conducción económica debía en primer lugar durar en el poder un tiempo suficientemente prolongado, y luego crear una situación que, más allá de su permanencia, fuera irreversible. El ministro de Economía y su grupo permanecieron durante cinco años: la irreversibilidad de la situación que crearon se manifestó inmediatamente después de su salida, cuando sus sucesores intentaron cambiar algo el rumbo y fracasaron rotundamente.

Martínez de Hoz contó inicialmente con un fuerte apoyo, casi personal, de los organismos internacionales y los bancos extranjeros —que le permitió sortear varias situaciones difíciles— y del sector más concentrado del *establishment* económico local. La relación con los militares fue más compleja, en parte por sus profundas divisiones —entre las armas y aun entre facciones— que se expresaban en apoyos, críticas o bloqueos a su gestión, y en parte por el peso que entre ellos tenían muchas ideas y concepciones que en el plan del ministro debían ser cambiadas, y con las que tuvo que encontrar algún punto de acuerdo. Fue una relación conflictiva, de potencia a potencia. Los militares juzgaban que el descabezamiento del movimiento popular, la eliminación de sus grandes instrumentos corporativos y la fuerte reducción de los ingresos de los sectores trabajadores debía equilibrarse, por razones de seguridad, con el mantenimiento del pleno empleo, de modo que la receta recesiva más clásica estaba descartada. También tenían los militares una visión más tradicional de la cuestión del Estado, o al menos de la parte de él que aspiraban a manejar en beneficio personal o corporativo. Pero muchos de los que aceptaron la propuesta básica de eliminar la participación del Estado en la transferencia de ingresos exigieron en cambio la supervivencia de las empresas estatales —generalmente conducidas por oficiales superiores— y la expansión del gasto público, lo que también bloqueó la clásica receta recesiva y supuso a la larga un fracaso en el plan del ministro. Las relaciones con los empresarios tampoco fueron fáciles, debido a la cantidad de intereses sectoriales que debían ser afectados; para imponerse, fue decisiva la inflexibilidad del ministro, unida a su capacidad de predicador, mostrando la tierra prometida al final de la travesía del desierto, con una seguridad mayor cuanto más la realidad parecía desmentir sus pronósticos. Pero su arma de triunfo principal fue

haber colocado durante varios años a la economía en una situación de inestabilidad tal que sólo era posible seguir avanzando, guiados por el mismo piloto, so riesgo de una catástrofe; cuando esto dejó de funcionar, la concentración y el endeudamiento ya habían creado los mecanismos definitivos de disciplinamiento y control.

Las primeras medidas del equipo ministerial, que cubrieron largamente el primer año, no dieron idea del rumbo futuro. Luego de intervenir la CGT y los principales sindicatos, reprimir a los militantes, intervenir militarmente muchas fábricas, suprimir las negociaciones colectivas y prohibir las huelgas, se congelaron los salarios por tres meses con lo que —dada la fortísima inflación— cayeron en términos reales alrededor del 40%. El Estado pudo superar su déficit y las empresas acumular, lo que sumado a los créditos externos rápidamente otorgados permitió superar la crisis cíclica sin desocupación.

Desde mediados de 1977 —y a medida que la conducción se afirmaba— comenzaron a plantearse las grandes reformas, que supusieron trastornar las normas básicas con que había funcionado la Argentina desde 1930. La reforma financiera acabó con una de las herramientas del Estado para la transferencia de ingresos entre sectores: la regulación de la tasa de interés, la existencia de crédito a tasas negativas y la distribución de este subsidio según normas y prioridades fijadas por las autoridades. Profundizando un mecanismo que ya operaba desde 1975, se liberó la tasa de interés, se autorizó la proliferación de bancos e instituciones financieras y se diversificaron las ofertas —títulos y valores indexados de todo tipo, emitidos por el Estado, se sumaron a los depósitos a plazo fijo, preferidos por los ahorristas— de modo que, en un clima altamente especulativo, la competencia mantuvo alta las tasas de interés, y con ella la inflación, que el equipo económico prácticamente nunca pudo o quiso reducir. En la nueva operatoria se mantuvo una norma de la vieja concepción: el Estado garantizaba no sólo los títulos que emitía sino los depósitos a plazo fijo, tomados a tasa libre por entidades privadas, de modo que ante una eventual quiebra devolvía el depósito a los ahorristas. Esta combinación de liberalización, eliminación de controles y garantía generó un mecanismo que llevó pronto a todo el sistema a la ruina.

La segunda gran modificación fue la apertura económica y la progresiva eliminación de los mecanismos clásicos de protección a la producción local, vigentes desde 1930. Se disminuyeron los aranceles, aunque en forma selectiva, y como posteriormente se agregó la sobrevaluación del peso, la industria local debió enfrentar la competencia avasallante de una masa de productos importados de precio ínfimo. La fiebre especulativa ganó a toda la población, que para defender el valor de su salario debía

colocarlo a plazo fijo por unos pocos días o ensayar alguna otra martingala más arriesgada; junto con el alud de productos importados de precio mínimo fueron los fenómenos salientes de esta transformación profunda y profundamente destructiva.

La transformación se completó con la llamada "pauta cambiaria", una medida de importancia adoptada en diciembre de 1978, poco después de que el general Videla fuera confirmado por la Junta Militar por tres años en la presidencia, aventando amenazas sobre la estabilidad del ministro. El gobierno fijó una tabla de devaluación mensual del peso, gradualmente decreciente hasta llegar en algún momento a cero. Se adujo que se buscaba reducir la inflación y establecer alguna previsibilidad, pero como la inflación subsistió, el peso se revaluó considerablemente respecto del dólar. La adopción de la pauta cambiaria coincidió con una gran afluencia de dinero del exterior, originado en el reciclamiento que los bancos internacionales debían hacer de los dólares generados por el aumento de los precios del petróleo, que en 1979 volvieron a subir notablemente. El flujo de dólares —origen del fuerte endeudamiento externo— fue común en toda América Latina y en muchos países del Tercer Mundo, pero en la Argentina lo estimuló la posibilidad de tomarlos y colocarlos sin riesgo aprovechando las elevadas tasas de interés internacionales, pues el Estado aseguraba la estabilidad del valor con que serían recomprados. Pero la "tablita" —tal el nombre popular de la pauta cambiaria— no bastó para reducir ni las tasas de interés ni la inflación, en buena medida por la incertidumbre creciente a medida que la sobrevaluación del peso anticipaba una futura y necesaria gran devaluación. Mientras se constituía la base de la deuda externa, esta "bicicleta" se agregaba a la "plata dulce" y los "importados coreanos" para configurar la apariencia folclórica de una modificación sustancial de las reglas de juego de la economía.

Su verdadero corazón se hallaba ahora en el sector financiero, donde se concentraron los beneficios. Se trataba de un mercado altamente inestable, pues la masa de dinero se encontraba colocada a corto plazo y los capitales podían salir del país sin trabas, si cambiaba la coyuntura, de modo que, antes que la eficiencia o el riesgo empresario, allí se premiaba la agilidad y la especulación. Muchas empresas compensaron sus fuertes quebrantos operativos con ganancias en la actividad financiera; muchos bancos se convirtieron en el centro de una importante red de empresas, generalmente endeudadas con ellos y compradas a bajo precio. Muchas empresas tomaron créditos en dólares, los emplearon en reequiparse o los colocaron en el circuito financiero, y para devolverlos recurrieron a nuevos créditos, una cadena de la felicidad que, como era previsible, en un momento se cortó.

El momento llegó a principios de 1980. Mientras la economía imaginaria del mercado financiero rodaba hacia la vorágine, la economía real agonizaba. Las altas tasas de interés eran inconciliables con las tasas de beneficio, de modo que ninguna actividad era rentable ni podía competir con la especulación. Todas las empresas tuvieron problemas, aumentaron las quiebras, y los acreedores financieros, que comenzaron a ver acumularse los créditos incobrables, buscaron solucionar sus problemas captando más depósitos, elevando así aún más la tasa de interés, lo que ponía en evidencia las consecuencias de garantizar los depósitos y a la vez eliminar los controles a las instituciones financieras. En marzo de 1980, finalmente, el Banco Central decidió la quiebra del banco privado más grande y de otros tres importantes, que, a su vez, eran cabezas de sendos grupos empresarios. Hubo una espectacular corrida bancaria, que el gobierno logró frenar a costa de asumir todos los pasivos de los bancos quebrados, que en un año llegaron a representar la quinta parte del sistema financiero.

El problema financiero se agravó a lo largo de 1980, y desde entonces hasta el fin del gobierno militar la crisis fue una constante. En marzo de 1981 debía asumir el nuevo presidente, general Roberto Marcelo Viola. Se vislumbraba que Martínez de Hoz dejaría el ministerio, y con él cesaría la vigencia de la "tablita", preñunciada por una masiva emigración de divisas. El gobierno debió endeudarse para cubrir sus obligaciones —la deuda pública empezó a sumarse a la privada— y finalmente tuvo que abandonar la paridad cambiaria sostenida. A lo largo de 1981, y ya con la nueva conducción económica, el peso fue devaluado en un 400%, mientras la inflación recrudescía llegando al 100% anual. La devaluación fue catastrófica para las empresas endeudadas en dólares y el Estado, que ya había absorbido las pérdidas del sistema bancario; terminó en 1982 nacionalizando la deuda privada de las empresas, muchas de las cuales los propios empresarios ya habían cubierto con salidas de dólares no declaradas.

La cira de la "plata dulce" terminaba; probablemente muchos de sus beneficiarios no sufrieron las consecuencias del catastrófico final, pero la sociedad toda debió cargar con las pérdidas. La suba de las tasas de interés en Estados Unidos indicó la aparición de un fuerte competidor en la captación de fondos financieros. En 1982 México anunció que no podía pagar su deuda externa y declaró una moratoria. Fue la señal. Los créditos fáciles para los países latinoamericanos se cortaron, mientras los intereses subían espectacularmente, y con ellos el monto de la deuda. En 1979, ésta era de 8.500 millones de dólares; en 1981 superaba los 25 mil y a principios de 1984 los 45 mil. Los acreedores externos comenzaron a imponer condiciones. Deshecho el

mecanismo financiero, la deuda externa ocupó su lugar como mecanismo disciplinador.

La economía real: destrucción y concentración

En cuanto a la economía "real", hubo un giro total respecto de las políticas aplicadas en las décadas anteriores. El valor asignado al mercado interno fue cuestionado y se reclamó prioridad para las actividades en las que el país tenía ventajas comparativas y podía competir en el mercado mundial. El criterio de proteger la industria —a la que se achacó su falta de competitividad— fue reemplazado por el del premio a la eficiencia; y fue abandonada la idea de que el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad se asociaban con la industria. Se trataba de un cuestionamiento similar al del resto del mundo capitalista, pero la respuesta local fue mucho más destructiva que constructiva.

La estrategia centrada en el fortalecimiento del sector financiero, la apertura, el endeudamiento y —como se verá— el crecimiento de algunos grupos instalados en distintas actividades, no benefició particularmente a ninguno de los grandes sectores de la economía. Por el contrario, Martínez de Hoz mantuvo conflictos con todos, aunque no encontró ninguna resistencia consistente. El sector agropecuario se encontraba en momentos en que se abrían culminaba su formidable expansión productiva en momentos en que se abrían nuevos mercados, particularmente el de la Unión Soviética, afectada por el embargo cerealero norteamericano, al tiempo que el gobierno eliminaba las retenciones a la exportación. Pero la sobrevaluación del peso llevó a los productores a una pérdida de ingresos y a una situación crítica, que culminó en 1980-1981. Los ingresos del sector agropecuario pampeano, que en etapas anteriores subsidiaban a la industria, en la ocasión se trasladaron al sector financiero y a través de él a la compra de dólares o de artículos importados. Luego, cuando la debacle cambiaria los volvió a colocar en buenas condiciones, la modificación de las condiciones en los mercados internacionales prolongó su crisis.

Por la pérdida de su tradicional protección, la industria sufrió la competencia de los artículos importados, que se sumó al encarecimiento del crédito, la supresión de la mayoría de los mecanismos de promoción y la reducción del poder adquisitivo de la población. El producto industrial cayó en los primeros cinco años alrededor del 20%, y también la mano de obra ocupada. Muchas plantas fabriles cerraron y en conjunto el sector experimentó una

verdadera involución. Lo más grave fue que la reestructuración de la actividad, en lugar de mejorar la eficiencia supuso, como planteó Jorge Katz, una verdadera regresión. Los sectores más antiguos e ineficientes, como el textil y el de confecciones, fueron barridos por la competencia, pero también resultaron muy golpeados aquellos nuevos, como el metalmeccánico o el electrónico, que habían progresado notablemente. En momentos en que en esos campos se producía en el mundo un avance tecnológico notable, la brecha que separaba a la Argentina, que se había reducido en los veinte años anteriores, volvió a ensancharse de manera irreversible. Las ramas industriales que crecieron y se beneficiaron con la reestructuración fueron sobre todo las que elaboraban bienes intermedios: celulosa, siderurgia, aluminio, petroquímica, petróleo, cemento, que emplean intensamente recursos naturales —mineral de hierro, carbón, madera— y tienen un efecto dinamizador interno mucho menor que las anteriores. Las escasas empresas dedicadas a estas actividades, sumadas a las automotrices, se beneficiaron de los regímenes de promoción establecidos antes de 1975 y que el nuevo gobierno mantuvo, y también de una protección arancelaria *ad hoc*, en el caso del papel de diario o de los automotores. Proyectadas en un tiempo en que se suponía que el crecimiento industrial se iba a profundizar, estas empresas se encontraron limitadas por la dimensión del mercado interno, y en muchos casos se convirtieron en exportadoras.

Si bien el sector industrial perdió mucha mano de obra, en el conjunto de la economía la desocupación fue escasa, tal como la conducción militar le había requerido al ministro. Hubo transferencias de trabajadores; en algunos casos de las grandes empresas —con más posibilidades de reducir sus costos laborales— hacia las medianas y pequeñas, y de la industria hacia los servicios: hubo muchos trabajadores que cambiaron su empleo asalariado por la actividad por cuenta propia. La mayor expansión se produjo en la construcción y sobre todo en las obras públicas: el gobierno se embarcó en una serie de grandes proyectos, algunos relacionados con el Campeonato Mundial de Fútbol y otros con el mejoramiento de la infraestructura urbana, como las autopistas de la Capital, aprovechando los créditos externos baratos. En los primeros años el gobierno hizo un esfuerzo sistemático para mantener los salarios bajos, pese a la escasa desocupación: hubo una fuerte caída del salario real y de la participación del ingreso personal en el producto, que pasó del 45% en 1974 al 25% en 1976, para subir al 39% en 1980. Por entonces, el gobierno permitió una mayor libertad a los trabajadores para pactar sus condiciones, pero sin la presencia sindical, lo que estimuló el aumento de las diferencias entre actividades y empresas. A partir de 1981, la crisis, la infla-

ción y la recesión hicieron descender dramáticamente tanto la ocupación como el salario real. En vísperas de dejar el poder, los gobernantes militares no podían exhibir en este campo ningún logro importante.

Cuando la burbuja financiera se derrumbó, quedó en evidencia que la principal consecuencia de la brutal transformación había sido —junto con la deuda externa— una fuerte concentración económica. A diferencia del anterior proceso de concentración, entre 1958 y 1963, el principal papel no correspondió a las empresas extranjeras. No hubo en estos años nuevas instalaciones de importancia, y en cambio algunas grandes empresas se retiraron, y otras vendieron sus activos, aunque se reservaron el papel de proveedoras de partes y de tecnología, como en el caso de algunas de las fábricas de automotores. A diferencia de veinte años atrás, el mercado interno, en franca contracción, resultaba escasamente atractivo; por otra parte, para estas empresas cuya ventaja residía en la posibilidad de planificar su actividad a un plazo mediano o largo no era fácil manejarse en forma eficiente en un medio altamente especulativo, en el que las decisiones diarias significaban grandes ganancias o grandes pérdidas y donde los empresarios locales tenían ventaja. Lo cierto es que, junto con algunas transnacionales, crecieron de modo espectacular unos cuantos grandes grupos locales, directamente ligados a un empresario o una familia empresarial exitosos, como Macri, Pérez Companc, Bulgheroni, Fortabat, o transnacionales pero con fuerte base local como Bunge y Born o Techint. Así, el *establishment* económico adquirió una fisonomía original.

En algunos casos esto fue el resultado de la concentración en una rama de actividad, que coincidió con la reestructuración y racionalización de la producción y el cierre de plantas ineficientes. Así ocurrió con el acero, y también con los cigarrillos, una actividad donde tres empresas extranjeras reunieron toda la actividad. Pero los casos más espectaculares fueron los de los conglomerados empresariales, que combinaron actividades industriales, de servicio, comerciales y financieras, tanto por una estrategia de largo plazo de diversificación y reducción del riesgo como —en el contexto fuertemente especulativo— por la búsqueda de distintos negocios de rápido rendimiento. Los grupos que crecieron contaron habitualmente con un banco o una institución financiera que les permitió manejarse en forma rápida e independiente en el sector donde, por unos años, se obtuvieron las mayores ganancias; pero muchos de los grupos que hicieron del banco el centro de su actividad desaparecieron luego de 1980. Sobrevivieron los que capitalizaron sus beneficios comprando empresas en dificultades, con las que constituyeron los conglomerados. Lo decisivo fue, sin embargo, establecer en torno de alguna de las empresas una relación ventajosa con el Estado.